

revólver como prohibida, el hecho de impedir á un ciudadano el uso de dicha arma, es contrario á la Constitucion y por consiguiente han sido violadas en la persona del promovente, las garantías consignadas en el art. 10 del pacto federal.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de dicha Constitucion, se declara: Que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia que dictó el Juez de Distrito, con fecha 20 de Octubre último, en la que amparó al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 14 de Enero de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el Lic. Agustín Obregon, como apoderado del presbítero D. Procopio Ocampo, contra los actos del jefe político de Leon y General Trisciliano Flores, que han ocupado en esa ciudad por disposicion del Ministerio de la Guerra, el edificio conocido con el nombre de Oratorio.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Agustín Obregon, como apoderado sustituto del Presbítero D. Procopio Ocampo, supuesto su estado, que es de alegar, dice: que en escrito de 19 de Marzo del presente año, se solicitó el amparo de la justicia federal, contra los procedimientos del ciudadano jefe político de Leon y del general en jefe de la primera brigada de la cuarta division, que por órden del ministerio de la Guerra, ocuparon una finca, sita en Leon, que se dice ser propiedad de D. Procopio Ocampo, violando en concepto del promovente, las garantías individuales, consignadas en los artículos 19, 16 y 27 de la Constitucion federal.

Al escrito de queja se acompañaron el poder que acredita la personalidad del Lic. Obregon, el testimonio del testamento extendido por el padre D. José Manuel Tinajero, segun el poder que le habia conferido el padre D. José Manuel Somera, una copia de una acta de un libro de la Congregacion de San Felipe, en la que consta que el día 24 de Agosto de 1858, fué electo Prepósito de la misma Congregacion, D. Procopio Ocampo, y una comunicacion del jefe político de Leon, trascribiendo otra de la jefatura de Hacienda, en la que se le decia al Sr. Ocampo, como encargado de la finca, ex-convento de los Felipenses, que entregara dicho edificio á la persona que se

había designado con las formalidades que se mencionaban en la misma comunicacion.

Con estas constancias se solicitó el amparo de la justicia federal, diciendo que D. Procopio Ocampo, era dueño de una casa conocida con el nombre del «Estudio,» de la que había sido despojado por una autoridad incompetente, sin que hubiera originado el despojo utilidad pública y sin que hubiera sido indemnizado previamente. La propiedad de la finca del Estudio, se deducía del testamento que en testimonio se acompañó, en el cual se había dejado á la Congregacion de Felipenses y en el caso en que se extinguiera esta corporacion, como lo había sido en virtud de las leyes de Reforma, fuera de la propiedad del último Prepósito; y como aparecía de la copia de una acta que también se ha presentado, el último Prepósito fué el Padre D. Procopio Ocampo. Se pidió además la suspension provisional del acto reclamado, y por auto de 19 de Marzo se declaró que no había lugar á decretarla con solo el escrito de queja y los documentos mencionados, porque la órden que motivaba la queja, se refería al ex-convento de Felipenses, y el acto reclamado versaba segun el primer escrito, en una finca, que se decía propiedad del Sr. Ocampo y no constaba la identidad de uno y otro edificio.

Pedido el informe de que habla el art. 5º de la ley de 20 de Enero de 1869 á las autoridades designadas como ejecutoras del acto reclamado, el C. General Prisciliano Flores, trascribió la comunicacion del ministerio de la Guerra de que se ha hablado, y el jefe político, remitió además una copia del acta de la entrega del ex-convento de Felipenses, en la que aparece que el Presbítero D. José Guadalupe Fernandez, á nombre del Sr. Ocampo, protestó contra la providencia, por ser el edificio de propiedad particular. Sin embargo de estos informes, no se decretó la suspension provisional del acto reclamado; y como por los informes que se pidieron conforme manda el art. 9º de la ley citada, no se esclareciera la verdad de

los hechos referidos en el ocurso del actor, fué necesario recibir el juicio á prueba, en cuyo término, á solicitud del mismo actor, se tuvieron como partes de su prueba los documentos que ya había exhibido, se recibió una informacion de cinco testigos que declaran, que les constaba que el Padre Ocampo desde el año de 1860 había poseído quieta y pacíficamente la casa conocida con el nombre del Estudio, que era la misma que fué convento de los Felipenses, y que esta posesion se había interrumpido en virtud de haberlo lanzado el jefe político el día que las fuerzas federales ocuparon la finca referida; constándoles además, que en la fecha en que se publicaron las leyes de reforma, el Padre D. Procopio Ocampo tenía el carácter de Prepósito de la Congregacion de Felipenses. El juez de letras de Leon, certificó que era público y notorio que la casa conocida en esa ciudad con el nombre de Oratorio, era la misma que algunos llamaban convento de Felipenses.

Estos son los hechos que constan en las presentes actuaciones, respecto de los cuales el promotor fiscal pasa á hacer algunas observaciones que suplica al juzgado tenga presente, pues á su juicio determinan el fallo que debe pronunciarse en este recurso.

Los artículos de la Constitucion que se dicen vulnerados, son el 1º, el 16 y el 27.

En el primero, no se consigna ninguna garantía individual; en él se hace la declaracion, que los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociales, y que en consecuencia, las garantías que otorga la Constitucion deben ser respetadas por todas las leyes y por todas las autoridades.

Los otros dos artículos en lo conducente á este juicio, garantizan la posesion y la propiedad, disponiendo el art. 16, que nadie puede ser molestado en estos derechos, sino por órden escrita de autoridad competente, en que se funde y motive la causa legal del procedimiento; y el 27, que la propiedad particular no puede ser ocupada,

sino por utilidad pública y ~~pr~~évia indemnización.

La violación de estos artículos se hace consistir, en que siendo el Padre D. Procopio Ocampo, poseedor y propietario de la casa llamada del Estudio, ha sido lanzado de ella por una autoridad incompetente y despojado de su propiedad.

La información de testigos de que se ha hecho mención, demuestra la posesión del Sr. Ocampo y desvanece la duda sobre la identidad de la casa llamada del Estudio, y el ex-convento de Felipenses; pero debe notarse que la orden de la jefatura de Hacienda para la ocupación de dicho edificio, fué comunicada al Padre Ocampo, como encargado de él y que estaba únicamente bajo su cuidado; pero el gobierno en virtud de las leyes de reforma había entrado ya de una manera legal en propiedad y posesión de dicho edificio, que el padre Ocampo no poseía verdaderamente, y bajo este supuesto no tendría ningún derecho que deducir en este juicio.

Respecto de los títulos en que se ha fundado el actor para decir que el Sr. Ocampo debe ser considerado como propietario, el promotor fiscal repite lo que expuso en su parecer al sustentarse el punto sobre suspensión del acto reclamado; el testimonio del testamento que se ha presentado no es bastante, pues aunque en él apareciera como heredero instituido, lo único que se deduciría, sería que tenía una acción, un derecho que tal vez podría ser contrariado en un litigio; pero no dominio actual sobre la finca donada.

Sin embargo, la resolución de esta cuestión no podría ser materia de un juicio de amparo, y la posesión del Sr. Ocampo, fundada en los documentos que se han exhibido, sería bastante para que una autoridad gubernativa debiera contenerse en sus procedimientos, hasta que la autoridad competente, la autoridad judicial, resolviera sobre el derecho que alega el Sr. Ocampo. De otra manera se violaría el artículo 16 de la

TOMO VII.—PARTE II.

Constitución que se ha invocado en este juicio.

En uno de los párrafos del escrito en que se inició este recurso, la jefatura de hacienda mandó valuar la finca que servía de habitación á los Padres Felipenses, y habiéndose opuesto el Padre Ocampo como propietario, se contuvo dicha oficina en sus procedimientos.

Se deduce de lo expuesto, que para que el juzgado pueda resolver con exactitud si en el presente caso se ha violado la garantía individual consignada en el art. 16 de la Constitución, pues respecto del art. 27 no aparece que se haya violado, por no haberse probado propiedad por parte de D. Procopio Ocampo, es necesario averiguar si la Nación ha adquirido la propiedad y posesión del ex-convento de Felipenses en Leon.

Por cuya causa el promotor fiscal pide se sirva el juzgado, para mejor proveer, librar oficios al ministerio de hacienda y á la jefatura de hacienda del Estado, para que remitan al juzgado los antecedentes que hayan motivado la orden que originó este juicio, y según lo que resultare resolver si debe otorgarse el amparo que se solicita.

Guanajuato, 20 de Julio de 1874.—*José Aguilar y Córdova.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 28 de Octubre de 1874.—*Luis G. Medina.*

Otro pedimento fiscal.

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal, cumpliendo con lo mandado en el auto de 2 del presente, dice: que en su escrito de 20 de Julio último, refirió los hechos y examinó las razones en que el promovente creyó conveniente fundar su solicitud.

La falta de datos hizo que, atendiendo á la naturaleza de estos juicios, pidiera al juzgado la práctica de algunas diligencias,

26.

que el mismo juzgado decretó de conformidad.

Los artículos de la Constitución en cuya violación se pretende apoyar la procedencia del presente recurso, son el 16 y el 27, respecto de los cuales, el que suscribe, ha procurado fundar que en su concepto, no aparece violación del último. Respecto de la garantía que se reconoce en el 16, cuando presenté el escrito de que antes he hecho mención, no existían datos bastantes para resolver si en el presente caso había sido violada.

Posteriormente se han recabado dos comunicaciones del ministerio de hacienda, en las cuales aparece: que el edificio que mandó ocupar el supremo gobierno, cuya orden motivó este recurso, volvió al dominio de la Nación, en virtud de la ley de 12 de Julio de 1859, como ocupado por una corporación religiosa, suprimida por el art. 59 de la misma ley; que fué vendido al C. Angel Barron, pero que á petición suya se rescindió el contrato; que el C. Miguel Sámano pidió su adjudicación, á la cual no se accedió para destinarlo al servicio militar.

En las actuaciones aparece, que el edificio de que se trata, estaba ocupado por una corporación religiosa, llamada del Oratorio de San Felipe; de manera que estando comprendido en la ley de 12 de Julio de 1859, la Nación no hizo mas que volver á la propiedad y posesión de dicho edificio, supuesto que no se ha probado que esté en el caso de que habla el art. 11 de la misma ley.

Resulta de lo expuesto, que la posesión legítima de dicho edificio pertenece á la Nación, por cuyo motivo el promotor fiscal, reproduciendo su escrito de 20 de Julio último, suplica al juzgado se sirva denegar el amparo que se solicita en este juicio.

Guanajuato, Octubre 13 de 1874.—*José Aguilar y Córdova.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, 20 de Octubre de 1874.

Viste el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Agustín Obregon, como apoderado sustituto del Presbítero D. Procopio Ocampo, contra la ocupación del edificio que antiguamente era Oratorio de Felipenses de Leon; cuya ocupación fué hecha por el C. general Prisciliano Flores, para que sirva de cuartel á las fuerzas federales el mencionado edificio, en cumplimiento de una resolución del ministerio de hacienda, expedida en 4 de Marzo del corriente año, y comunicada por la autoridad política de Leon al encargado del Oratorio: vista la demanda del representante del agraviado, que funda su petición en los derechos garantizados por los arts. 16 y 27 del pacto federal, y en el art. 19 de dicho código, exponiendo que es propietario y poseedor de la finca de que se trata, por haberla adquirido á título de herencia, según aparece del testamento que otorgó D. José Manuel Quijano con el carácter de comisario de D. José Manuel Somera, en 12 de Enero de 1849: vistos los informes rendidos por las autoridades ejecutorias del acto reclamado, las pruebas rendidas por el promovente, los alegatos de las partes, las diligencias practicadas para mejor proveer, la citación para sentencia y todo lo demás que en autos consta:

Resultando: que el testamento de que se ha hecho mérito, en su cláusula 18 instituye por único y universal heredero al Oratorio de San Felipe Neri de la ciudad de Leon, en el remanente líquido de todos los bienes pertenecientes á D. José Manuel Somera; entre los cuales se cuenta el edificio antes enunciado.

Resultando: que la cláusula 19 del mismo testamento declara: «que en caso de que el gobierno civil ó eclesiástico quiera disponer de los bienes expresados, en el acto se tengan como propiedad individual del reverendo padre Propósito que fuere del Orato-

rio, y los haga suyos, disfrutándolos sin remordimiento, hasta que pasada toda tentativa y riesgo, puedan volver á su objeto, y que si por algun evento dejara de existir el Oratorio, en este caso, el padre Prepósito, antes de la extincion, (si hubiera tiempo) ó despues (si no lo hubiere), dispondrá de los bienes lo que juzgue oportuno, ó para que se depositen y conserven de alguna manera segun las circunstancias, para que pasado el intento de las pretensiones de apoderamiento de ellos, vuelvan á su primera distribucion, segun lo dispuesto en el testamento. ó los distribuirá, donará ó hará de ellos lo que tenga por bien, sirviéndole de regla y llevando por norte no dejar nada, nada, nada, que puedan tomarse las autoridades que lo intenten, sea eclesiástica ó civil, sino solo en el caso preciso de una Bula pontificia expedida expresa y terminantemente ad hoc, y con el objeto único y específico de dichos bienes.

Resultando: que el Presbítero D. Procopio Ocampo, tenia la investidura de Prepósito del Oratorio de San Felipe de Leon, cuando se publicaron las leyes de reforma.

Resultando: que con tal carácter ha estado poseyendo quieta y pacíficamente la finca antes de ser ocupada por el ciudadano general Flores, y á pesar de haber sido denunciada con arreglo á las leyes de reforma, segun lo revela la informacion de testigos, rendida durante la dilacion probatoria.

Resultando: que el ministerio de hacienda ordenó la ocupacion de que el peticionario se queja, y al hacerlo, se apoyó en la ley de 12 de Julio de 1859, en virtud de la cual el Oratorio de San Felipe Neri, volvió al dominio de la Nacion, como ocupado por una de las órdenes religiosas ó corporaciones que suprimió el art. 5º de la misma ley; y por no estar comprendido en la excepcion del art. 11, supuesto que no ha sido designado para el culto por la autoridad competente.

Considerando: que la propiedad y posesion que el C. Lic. Obregon estima violadas

en la persona de su representado, no están plenamente acreditadas, porque no ha solicitado ni obtenido éste en el juicio correspondiente, la declaracion de sus derechos de propietario y poseedor como heredero del presbítero D. Manuel Somera, y porque el testamento que se exhibe, como título de propiedad, manifiesta que á la promulgacion de la ley citada por el ministerio de hacienda, pertenecia al clero la finca tantas veces repetida, la cual por lo mismo ha debido entrar al dominio de la Nacion, no pudiendo desde entonces ocuparla ninguna persona ó corporacion sin consentimiento del gobierno, y siendo, en consecuencia, ilegítima la posesion en que ha estado posteriormente el Presbítero D. Procopio Ocampo:

Considerando: que por no haber probado el promovente la propiedad y la posesion legítima de su poderdante, no deben reputarse conculcadas en perjuicio de éste las garantías individuales que proclaman los arts. 16 y 27 de la Constitucion.

Considerando: que el art. 1º del citado Código, no establece garantía alguna determinada; siendo como es una declaracion general que reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, y manda que todas las leyes y las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la Constitucion.

Considerando: que el Presbítero Ocampo tiene expeditos todos los demas recursos legales para reclamar, en la vía que corresponde, los procedimientos del C. General Flores y de la jefatura política de Leon.

Por tales consideraciones, de conformidad con lo que pide el ciudadano promotor fiscal y fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al Presbítero D. Procopio Ocampo, contra la ocupacion del Oratorio de Felipenses de Leon, ejecutada por el C. General Prisciliano Flores, con la intervencion de la autoridad política de aquella ciudad. Notifíquese

se este fallo á las partes, publíquese en el periódico oficial y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, para los efectos consiguientes. Así el C. Juez de Distrito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*
—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 28 de Octubre de 1874.—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 4 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por el Lic. Agustín Obregon, como apoderado del Presbítero D. Procopio Ocampo, contra los actos del jefe político de Leon y general Prisciliano Flores, que han ocupado en esa ciudad por disposicion del ministerio de guerra, el edificio conocido con el nombre de oratorio; ocupacion que en concepto del promovente importa una violacion de las garantías que consignan los arts. 16 y 27 de la Constitucion de la República, en razon de que el edificio mencionado es propiedad de su poderdante, y así lo ha poseído quieta y pacíficamente desde la promulgacion de la ley de nacionalizacion de bienes eclesiásticos; y

Considerando: que el Presbítero Ocampo, funda su derecho de propiedad en que siendo Prepósito del Oratorio de Felipenses de Leon en la época en que se promulgaron las leyes de nacionalizacion de bienes eclesiásticos, por este mismo hecho quedó como legítimo propietario y poseedor de la finca en cuestion, conforme al testamento otorgado por D. José Manuel Somera, en 12 de Enero de 1849, testamento que declara en la cláusula décima octava, que se instituye al Oratorio de San Felipe Neri, de la ciudad de Leon, por único y universal heredero en el romanente de los bienes del Sr. Somera entro los cuales está comprendido el edificio mencionado; y en la cláusula

la décima novena, ordena que en caso de que el gobierno civil ó eclesiástico quiera disponer de los bienes legados, en el acto se tengan como propiedad individual del padre Prepósito que fuere del Oratorio, y los haga suyos, hasta que pasada toda tentativa y riesgo puedan volver á su objeto.

Considerando: que la disposicion testamentaria contenida en la cláusula décima novena de que se acaba de hacer mérito, por su ilegalidad no puede reputarse como un título traslativo de dominio á favor del Presbítero Ocampo, y por lo mismo, que tampoco puede tener el carácter de posesion legítima la detencion por parte del mismo señor, del edificio conocido con el nombre de Oratorio.

Considerando: que en consecuencia, no teniendo el quejoso derecho alguno de propiedad ó de posesion sobre la finca que reclama, la ocupacion de la misma á nombre del gobierno general, no importa en ningún sentido la violacion de los arts. 16 y 27 de la carta fundamental.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion de la República, y 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º Es de confirmarse y se confirma, la sentencia pronunciada por el ciudadano Juez de Distrito de Guanajuato, en 20 de Octubre del presente año, que declara: que la justicia de la Union no ampara ni protege al Presbítero D. Procopio Ocampo, contra la ocupacion del Oratorio de Felipenses de Leon, ejecutada por el general Prisciliano Flores, con la intervencion de la autoridad política de aquella ciudad.

2º Se impone al quejoso una multa de cien pesos.

Devuélvansc los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte

Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico.—México, Diciembre 23 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por D. Guillermo Silver, contra los procedimientos del administrador de la Aduana terrestre de Mazatlan, que se niega á recibirle en moneda de cobre el pago de los derechos de consumo y contribucion federal.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Fiscal dice: De los antecedentes de este juicio resulta: que el Sr. Silver pagó voluntariamente (sin duda en moneda de plata ú oro) los derechos que le cobraba la Administracion de la Aduana Terrestre; y como en hacer este pago, por mas que ha ya mediado la oferta de hacerlo en moneda de cobre, y por mas que esta oferta haya sido rechazada, no hay en concepto del fiscal, violacion de ninguna de las garantías constitucionales; El mismo cree que no hay asunto para el presente juicio de amparo, y que la pretension del Sr. Silver debe ser justamente desechada.

Así pide al juzgado se sirva determinarlo.—Mazatlan, Octubre 12 de 1874.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Octubre 20 de 1874.—Vis-
tos:—Don Guillermo Silver, de este comer-
cio y vecindad, se ha presentado pidiendo am-
paro contra el acto del Administrador de la
Aduana Terrestre de esta ciudad, por el que
se niega á recibirle en moneda de cobre la
suma de \$ 52 75 cs. por los derechos de
consumo y contribucion federal que causa-
ron dos bultos de efectos del país, y por la
parte de recargos ó multa que en la mis-
ma suma se contienen y califica de indobi-
dos.

De autos aparece, que los derechos de
consumo y contribucion federal importaron
\$ 46 60cs.; \$ 2 79 cs. la multa por haber da-
do lugar al requerimiento de pago, y....
\$3. 26 cs. el recargo por gastos de embargo
(fs. 1 y 2.)

Tambien resulta probado, que antes de
verificarse el embargo fué cuando el quejo-
so ofreció pagar en cobre; que el ejecutor
no lo admitió, y que ya comenzaba á hacer
el embargo cuando verificó el pago en plata,
entregando los \$ 42 75 cs. y reservando sus
derechos para ocurrir á la justicia federal
pidiendo la devolucion de la plata, y que se
recibiera el cobre en su lugar.

En vista de que el pago se hizo en mo-
neda de plata, el ciudadano Promotor fiscal
créa que no procede el amparo, porque lo
califica de voluntario el acto de pagar. Pe-
ro aunque no estuviera expresa la salvedad
de derechos mencionada, bastaba que lo hu-
biera verificado por la fuerza, que implica el
mandato de la autoridad.

El Administrador de la Aduana se negó
á recibir la moneda de cobre, porque la
fraccion 22 del art. 1º de la ley del Estado
de 28 de Diciembre último, previene que
todos los derechos que corresponden á éste,
se paguen en moneda legal de plata ú oro.

La de cobre de que aquí se trata, ha si-
do acuñada en una oficina federal, cual es
la casa de moneda de Culiacan, y puesta
en circulacion forzada, no solo para los par-